



29
FORMA A-65
AMPARO DIRECTO: 8681/84.
QUEJOSO: PRODUCTOS DE CONCRETO TOLTECA,
S. A.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GUITRON.
SECRETARIO: LIC. JAIME MARROQUIN ZALETÁ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corres-
Vo.Bo. pondiente al día veintisiete de febrero de mil novecien-
tos ochenta y cinco.

V I S T O para resolver el juicio de amparo di-
recto número 8681/84, promovido por [REDACTED],
en su carácter de representante legal de Productos de Con-
creto Tolteca, S. A., contra el acto que reclama del Pri-
mer Tribunal Unitario del Primer Circuito, que estimó vio-
latorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Fede-
ral, consistente en la sentencia definitiva de siete de ju-
nio de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada en la se-
gunda instancia del juicio ordinario mercantil que promo-
vió la quejosa en contra de [REDACTED]

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Según constancias de autos, estos son-
los antecedentes del caso.

Segundo.- Mediante escrito presentado el veintidós de octu-
bre de mil novecientos setenta y nueve, ante el Juez Prime-
ro de Distrito del Distrito Federal en Materia Civil, Pro-
ductos de Concreto Tolteca, S. A., por conducto de su apo-
derado [REDACTED] demandó a [REDACTED]

[REDACTED], lo siguiente:

"a) La aprobación del ajuste final de obra ejecutada por -
"mi mandante a la demandada, según cuaderno de ajuste que-
"se acompaña y que arroja a cargo de la demandada un saldo

A. D. 8681/84.

"de [REDACTED] [REDACTED]

"b) El pago de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED], que adeuda a mi representada, con motivo de un contrato de obra celebrado entre PREMESA (hoy Productos de Concreto Tolteca, S. A.), y la demandada e-
"incumplido por esta última.- - - c) El pago de los intereses que han sido causados y que se seguirán causando -
"hasta en tanto no sean totalmente liquidados los conceptos anteriores.- - - d) El pago de los gastos y costas -
"que se causen en el presente juicio."

Como hechos fundatorios de su demanda, la actora narró los siguientes: "1. Durante 1977, PREMESA recibió de la demandada una solicitud de cotizaciones para -
"la ejecución de una obra complementaria en la [REDACTED] -
"de [REDACTED] propiedad de la demandada y ubicada en [REDACTED] -
"[REDACTED], de esta ciudad.- - - 2. -
"Presentada la cotización por mi mandante, se celebró un -
"concurso como resultado del cual se firmó el contrato para la fabricación, transporte y montaje de elementos pre-
"colados y presforzados que se armarían como obra complementaria, en la construcción de la [REDACTED] -
"antes indicada. (Se acompaña en 20 fojas un ejemplar del -
"indicado contrato. Anexo 2).- - - 3. Formó parte del -
"contrato la cotización de 2 de agosto de 1977, que originalmente se acompaña en 6 fojas (Anexo 3).- - - 4. De conformidad con la cláusula quinta del contrato, las obras se-
"ejecutarían de acuerdo con el programa de trabajo cuyo -

VERCL



"original se acompaña y en el que se señaló como fecha de
"iniciación de las obras el 16 de agosto de 1977 (Anexo -
"4).- -- 5. Las obras contratadas no pudieron iniciarse-
"en la fecha convenida, debido a que la demandada no pro-
"porcionaba los planos completos y definitivos de la ter-
"minal, por lo que desde el 24 de agosto de 1977, se le -
"estuvo requiriendo por mi mandante la presentación de di-
"chos planos (copia de carta de 24 de agosto de 1977. (A-
"nexo 5).- -- 6. Como se comprueba por la [REDACTED]
[REDACTED] (CONTEO), (filial de la -
"demandada), no fue sino hasta el 28 de octubre de 1977,-
"que se enviaron a mi mandante los programas generales, -
"de la obra que eran necesarios para la iniciación de la-
"misma (Anexo No. 6).- -- 7. En diciembre de 1977, la --
"demandada propuso nuevos cambios y reformas al programa-
"de trabajo que fueron aceptados por mi mandante, como se
"comprueba por la copia de carta de fecha 16 de dicho mes
"y año. (Anexo 7).- -- 8. La ejecución de la obra se di-
"vidía en dos partes: -- a) La fabricación de diversos-
"elementos que aparecen en las cotizaciones y b) La insta-
"lación, transporte y montaje de los mismos en lo que pudie-
"ra llamarse obra gruesa o básica.- -- 9. Como se ve por
"la cotización que formó parte del contrato, el presupues-
"to tenía una validez de 30 días a partir de su fecha, --
"por lo que, consecuentemente, la dilación de las obras -
"imputable a la demandada, ocasionó una variación en los-
"precios unitarios que, naturalmente, alteraron el costo-
"de la obra.- -- 10. Además, la demandada, por conducto-
"de su filial CONTEO, S. C., ordenó diversas modificacio-

A. D. 8681/84.

"nes a la obra contratada y adiciones a la misma, como se
"comprueba con las cartas de 13 de junio, 19 de marzo y -
"28 de junio, todas de 1978, (Anexos 8, 9 y 10).- - - 11.
"Mi mandante convino en las modificaciones, ajustes y adi-
"ciones a las obras, así como en la modificación de las -
"fechas para ejecutarlas.- - - 12. Como ya se indicó, los
"programas de trabajo y presupuestos, formaron parte del-
"contrato y el precio de [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], que importó la primera cotiza-
"ción, estaba sujeto a variación, según se desprende de -
"la condición No. 19 que figura al reverso de la cotiza-
"ción indicada y de la aceptación de modificaciones y nue-
"vas obras a que antes se hizo referencia.- - - 13. En --
"pláticas sostenidas entre representantes de mi mandante-
"y de la demandada, al advertirse que la dilación en la-
"ejecución de los trabajos imputable a esta última y las-
"modificaciones solicitadas por la demandada influirían -
"sobre la determinación de los precios unitarios, se acor-
"dó que, tomando en consideración los anticipos recibidos,
"mi mandante accediera, por razones prácticas, a presen-
"tar las primeras estimaciones, conforme a la cotización-
"inicial, a reserva de realizar un ajuste final que inclu-
"yera los incrementos por adiciones, nuevas obras y alte-
"ración de los precios unitarios, debido al conocido pro-
"ceso inflacionario que padecemos.- - - 14. Lo anterior -
"se demuestra claramente por las siguientes circunstancias
"a) Parte del trabajo cotizado por mi mandante en la can-
"tidad de [REDACTED]



24

FORMA A-55

[REDACTED], se acordó a solicitud de la
"demandada que ésta lo encomendara a un segundo contratista y que en el ajuste final que se hiciera se descontaría a mi mandante el importe de la citada parte de la obra. Como puede verse por la proposición de ajuste que hace la demandada y a la que adelante me referiré, pretende [REDACTED] rebajar del pago que debe hacer a mi mandante, no la suma de [REDACTED]

[REDACTED], que aparece en la cotización inicial, sino la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED]), suma que se alcanza con la alteración de los precios (anexos 11 y 12), lo cual debe considerarse justo. -- b) Terminada la obra, la demandada ha propuesto el ajuste final, según se comprueba por la copia de la carta enviada el 22 de agosto de 1979 por CONTEO al Presidente de [REDACTED] y pagar por finiquito la suma de \$ [REDACTED]

[REDACTED]), cuando en realidad justa y equitativamente, adeuda a mi mandante la cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED]), conforme al ajuste procedente, contenido en el Anexo 13, el cual [REDACTED]

[REDACTED], se niega a aceptar y pagar sin razón alguna."

SEGUNDO.- Mediante proveído de treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, el juez del conocimiento tuvo por acusada la rebeldía hecha valer por la-

LA NACION

A. D. 8681/84.

actora, en virtud de que la demandada no dio contestación en forma oportuna a la demanda.

TERCERO.- Seguido el juicio en sus diversos trámites, el juez del conocimiento pronunció sentencia definitiva el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, que concluyó con los siguientes puntos resolutive: "PRIMERO: Es competente este Juzgado para conocer del presente juicio.- - SEGUNDO: Es procedente la vía elegida para resolver la controversia planteada.- - TERCERO: El actor PRODUCTOS DE CONCRETO TOLTECA, S. A., no probó su acción y el demandado [REDACTED], sí probó en contrario, en consecuencia.- - CUARTO: Se absuelve a [REDACTED] de las prestaciones que en el presente juicio se le reclaman.- - QUINTO: No ha lugar a decretar especial condena en costas.- - - NOTIFIQUESE."

CUARTO.- Inconforme con el fallo anterior, la actora lo recurrió en apelación y substanciado el recurso, el siete de junio de mil novecientos ochenta y cuatro el Tribunal responsable pronunció sentencia definitiva, que concluyó con los siguientes puntos resolutive: "PRIMERO:- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, pronunciada por el Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal en Materia Civil, en el juicio ordinario mercantil número 240/79, promovido por PRODUCTOS DE CONCRETO TOLTECA, S.A., contra la empresa denominada [REDACTED] - - SEGUNDO:- Notifíquese personalmente...".

SE
NOTIFICO



QUINTO.-- En contra de la sentencia mencionada en el punto anterior, la actora promovió el presente juicio de amparo, mediante demanda presentada ante el Tribunal responsable el seis de julio de mil novecientos ochenta y cuatro. En proveído de dos de octubre del mismo año, el Presidente de esta Tercera Sala admitió la demanda; la autoridad responsable rindió su informe justificado; el Agente del Ministerio Público Federal solicitó se niegue el amparo a la quejosa y en estado de sentencia, el expediente fue turnado al suscrito Ponente, mediante proveído de veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, notificado por lista a las partes el cuatro de diciembre del mismo año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política; 3 bis, 44, 158, 163 y 167 de la Ley de Amparo y 26, fracción III, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un asunto cuya cuantía excede de [REDACTED] que es la que resulta de multiplicar por veinticinco, el salario mínimo anual vigente en el Distrito Federal, al momento de la presentación de la demanda de amparo (ésta se presentó el seis de julio de mil novecientos ochenta y cuatro y el salario mínimo vigente en esa época era de ochocientos dieciséis pesos diarios). En efecto, la sentencia reclamada confirma el fallo

A. D. 2581/84.

de primer grado en el que se absolvió a la demandada del pago de la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] veinticinco centavos, así como de las demás prestaciones accesorias reclamadas por la actora (cuyo monto preciso no se desprende de la demanda original ni de las constancias materia de la litis constitucional).

SEGUNDO.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado que rindió la autoridad responsable y con los autos originales de ambas instancias que remitió.

La demanda de amparo aparece presentada en tiempo, pues el acto reclamado fue notificado a la quejosa el quinde de junio de mil novecientos ochenta y cuatro y la demanda se presentó ante la autoridad responsable el seis de julio del mismo año, esto es el décimo quinto día del término legal establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

TERCERO.- Las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada son las siguientes:

"Es infundado el primer agravio aducido por el [REDACTED] en su carácter de apoderado de PRODUCTOS DE CONCRETO TOLTECA, S. A., porque es inexacto que el juez de primera instancia haya infringido los artículos 2626 y 2627 del Código Civil y el numeral 78 del Código de Comercio, porque el hecho de que el juzgador haya determinado que en la especie es improcedente la acción ejercitada por la pretensora, tiene su apoyo jurídico en lo pactado por los contratantes en el

ENCUENTRO
27



26

"acuerdo de voluntades base de la acción, en cuya parte -
"introdutiva se precisó que se trata de un contrato a --
"precio alzado, y en su segunda cláusula se fijó como im-
"porte total de las obras contratadas la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] Y-
"además se estableció con toda claridad que si en las es-
"timaciones de obra realizadas se encontraran diferencias

"en las cantidades consignadas en el presupuesto, ambas -

"partes aceptaron que no tendrían derecho a percibir las-

"diferencias de precio que resultaran lo anteriormente -

"pactado por las partes, encuadra a la perfección en lo -

"dispuesto por los artículos 2626 y 2627 del Código Civil

"que textualmente preceptúan lo siguiente: "Art. 2626.- -

"El empresario que se encarga de efectuar alguna obra por

"~~precio determinado~~ no tiene derecho de exigir después --

"ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los -

"materiales o de los jornales.", "Art. 2627.- Lo dispues-

"to en el artículo anterior se observará también cuando -

"haya habido algún cambio o aumento en el plano o diseño,

"a no ser que sean autorizados por escrito por el dueño y

"con expresa designación del precio."; como se podrá ob--

"servar los indicados preceptos legales son bastante cla-

"ros en cuanto establecen que en un contrato por precio -

"determinado (similar al celebrado por los contendientes),

"el empresario no tiene derecho a exigir ningún aumento,-

"aunque lo haya tenido el precio de los materiales o de -

"los jornales, inclusive cuando haya habido algún cambio-

"o aumento en el plano o diseño, excepto cuando sean auto



"rizados por escrito por el dueño y con expresa designa--
"ción del precio; en consecuencia, si la demandante mani--
"festó que los precios unitarios fueron superiores a los--
"inicialmente pactados, motivada entre otras causas por--
"que la demandada retrasó la entrega de los programas, --
"además de que ordenó reformas, modificaciones y adicio--
"nes a la obra contratada, el suscrito estima que con apo--
"yo a lo dispuesto en los citados preceptos legales, la -
"pretensora debe absorber los aumentos a los precios uni--
"tarios, pues debe sujetarse a lo contratado, máxime si -
"se toma en cuenta que en autos no se demostraron los mo--
"tivos en que pretendió justificar esos excedentes, ya que
"como se indicó en su oportunidad, las pruebas que aportó
"durante el juicio no son aptas para acreditar que la --
"obra se retrasó por causas imputables a la demandada, --
"que ésta haya ordenado las reformas, modificaciones y --
"adiciones a la obra contratada, pues en el expediente no
"aparece ningún documento firmado por el representante le--
"gal de la demandada ordenando las supuestas modificacio--
"nes, adiciones o reformas, pero aun aceptando que los do--
"cumentos exhibidos por la pretensora acrediten dicho ex--
"tremo, cabe destacar que en ellos no se especifica el --
"precio adicional que se debería de pagar por las citadas
"modificaciones, en tal virtud, no se satisfacen los re--
"quisitos previstos por el artículo 2627 del Código Civil
"para el propietario que está obligado a pagar el precio--
"adicional, por lo que es de considerarse que la demanda--
"da se obligó a cubrir el precio indicado en el contrato--
"original, pues en esos términos aparece que se obligó,

SUPREMA



27 FORM 4-66

"conforme a lo previsto por el artículo 78 del Código de Comercio, sin que esto último resulte inmoral o ilegal - como lo afirma el apelante, puesto que la última parte - del artículo 2627 del Código Civil es bastante claro al establecer que la designación del precio debe constar expresamente en los cambios ordenados por el propietario, - por lo que es inexacto que el hecho de que la demandada no satisfaga las pretensiones de la actora constituya un enriquecimiento ilegítimo, puesto que se vuelve a repetir, al no demostrarse que la demandada ordenó las modificaciones que señala la pretensora, resulta ilógico que se le obligue al pago de las mismas."

"La primera parte del segundo agravio del informe es infundado, porque si bien es cierto que en autos no existe prueba que demuestre que la actora estuvo de acuerdo en absorber el costo de las adiciones y modificaciones efectuadas a la obra contratada, también es verdad que tampoco existen elementos de convicción que acrediten que se hayan satisfecho los requisitos del artículo 2627 del Código Civil, esto es, que la propietaria haya ordenado esas modificaciones y que además haya autorizado por escrito el precio adicional."

§ "La segunda parte del agravio que se analiza es fundado pero inoperante para modificar o revocar la sentencia impugnada, porque le asiste razón al apelante al afirmar que el juez de primera instancia omitió tomar en cuenta que parte de las obras fueron efectuadas por un tercer constructor, circunstancia que está debidamente acreditada con la confesional a cargo de [REDACTED]"

A. D. 8631/84.

[REDACTED]
"quienes en su carácter de Presidente, Vicepresidente y -
"Consejo Delegado, respectivamente, de la empresa denomi-
"nada [REDACTED]

[REDACTED] en lo substancial admitieron que por acuerdo -
"de los contratantes, la sociedad denominada [REDACTED]
"efectúa obras que inicialmente estaban asignadas en el -
"contrato base de la acción para ser realizadas por [REDACTED]

[REDACTED] y que los precios de las obras -
"realizadas por [REDACTED], fueron diferentes a los --
"precios asignados en el contrato original; sin embargo, -
"esa cuestión no fue materia de la litis, porque la cir--
"cunstancia de que la actora haya manifestado en el últi-
"mo hecho de su demanda que su contraria pretendía dedu--
"cirle una cantidad mayor al precio de la obra que la ac-
"tora no ejecutó, ello no quiere decir que el juzgador --
"estuviera obligado a resolver sobre el particular, toda-
"vez que en el capítulo de prestaciones del escrito ini--
"cial de la demandante no se hizo ninguna petición al res-
"pecto, pues las pretensiones de la actora consistieron -
"en la aprobación del ajuste final, el pago de la cantidad
"de [REDACTED]

[REDACTED] por concepto
"de adeudo a cargo de la demandada, el pago de los intere-
"ses causados y que se siguieran causando sobre los ante-
"riores conceptos y el pago de gastos y costas del juicio,
"por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
"los 1322, 1325, 1326 y 1327, el juzgador estuvo en lo --
"correcto en ocuparse exclusivamente de lo reclamado en

STAMP
SER



"el capítulo de pretensiones de la demandante, pues de --
"abordar una cuestión que no fue motivo de reclamación co
"mo lo es la diferencia de precios que según la actora, --
"la demandada pretende deducirle, resultaría jurídicamen-
"te ilegal la resolución que se pronunciara, lo anterior,
"de acuerdo a lo dispuesto en la jurisprudencia número --
"342, visible en la página mil treinta del volumen de la-
"Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na---
"ción, correspondiente al último Apéndice al Semanario --
"Judicial de la Federación, publicado el año de mil nove-
"cientos setenta y cinco, que textualmente dice lo siguen
"te: "SENTENCIAS CIVILES.- Sólo deben resolver sobre los-
"puntos sujetos a debate, sin tomar en consideración hechos
"distintos".

"El tercer agravio del inconforme es infundado,
"porque es inexacto que con motivo de las modificaciones-
"~~al contrato original~~, se trata en realidad de un nuevo --
"contrato y que en virtud de la dilación en la ejecución-
"de las obras que fueron aceptadas por las partes, se de-
"ben considerar como admitidas las variaciones en los pre-
"cios; lo entendible de esos argumentos radica en que, --
"como se señaló con anterioridad, al quedar indemostrada-
"la fecha exacta que las partes fijaron para la iniciación
"de la obra y al acreditarse que las modificaciones no --
"fueron ordenadas directamente por la empresa demandada o
"por sus representantes, se carecen de bases jurídicas pa-
"ra determinar con precisión la variación de los precios-
"porque es imposible establecer el tiempo que se retrasó-
"la ejecución de la obra, asimismo, el juzgador no cuenta

A. D. 8681/84.

"con elementos para considerar que el retraso de la obra -
"se debió a causas imputables a la demandada, porque, se -
"vuelve a insistir, la documentación exhibida por la acto -
"ra para acreditar las supuestas modificaciones aparece -
"firmada por una empresa ajena a los contratantes, por lo
"que es falso que el Juez de Distrito haya infringido el -
"artículo 78 del Código de Comercio."

"Son infundados los argumentos expresados por -
"el apelante en los tres primeros párrafos de su cuarto -
"agravio, porque es inexacto que el a quo se haya apoyado
"exclusivamente en lo establecido en el contrato original, -
"toda vez que además de lo convenido por los contratantes
"en el citado acuerdo de voluntades, el juzgador también -
"se apoyó en lo preceptuado por los artículos 2526 y 2627
"del Código Civil, que como ya se dijo con anterioridad, -
"resultan perfectamente aplicables al caso de que se tra -
"ta, y además se fundó en lo dispuesto en la tesis visi--
"ble en la página treinta y siete del informe rendido por
"el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Na--
"ción al finalizar el año de mil novecientos setenta y --
"tres, y que aparece bajo el rubro "CONTRATO DE OBRAS A -
"PRECIO ALZADO"; es verdad que el ajuste demandado se re -
"clamó con motivo de las modificaciones especificadas en -
"el escrito inicial de la actora, sin embargo, se vuelve -
"a reiterar que en el expediente no quedó plenamente de--
"mostrado que las aludidas modificaciones hayan sido orde -
"nadas por la demandada [REDACTED]

[REDACTED], además de que tampoco se acre -
"ditó con exactitud el tiempo que se retrasó la obra, en-



"virtud de que el programa de trabajo que la pretensora --
"exhibió se desestimó porque no satisface los extremos pre-
"cisados en el contrato original, en donde se estableció --
"que dicho programa estaba firmado por ambos contratantes,
"en cambio, el presentado por la demandante tiene una fir-
"ma ilegible que no corresponde a ninguno de los que inter-
"vinieron en el acuerdo de voluntades base de la acción."

"Es fundado el motivo de inconformidad aducido --
"en el último párrafo del agravio que se analiza, pero ino-
"perante para modificar o reformar la sentencia impugnada,
"toda vez que si bien es cierto que en la parte considera-
"tiva de ésta se sostuvo que como no se demandó el ajuste-
"en virtud del cumplimiento del contrato, se dejan a salvo
"los derechos de la actora para que los haga valer en la --
"vía y forma que lo estime conveniente, sin que se haya he-
"cho esa salvedad en la parte resolutive; no obstante lo --
"anterior, el suscrito considera que esa omisión en que in-
"currió el juzgador no resulta infractora del orden jurídi-
"co, porque si se toma en cuenta que la acción de la acto-
"ra se declaró improcedente por las razones expuestas en --
"la misma sentencia y que se consideran ajustadas a derecho
"por los motivos ya especificados con anterioridad, es in-
"concuso que esa determinación no es susceptible de contro-
"vertirse en diverso juicio, puesto que ya fue precisada --
"en resolución judicial."

"El quinto agravio del inconforme es infundado, --
"toda vez que, por respetable que sean los conceptos doctri-
"narios de Julián Bonnecase, Rafael Rojina Villegas y la --
"jurisprudencia francesa citados por el apelante, de confor-



A. D. 8681/84.

"midad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitu-
 "ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzga--
 "dor está obligado a dictar sus resoluciones con apoyo en-
 "lo dispuesto en la Ley positiva de nuestro país, por lo -
 "que el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al fundarse
 "en lo preceptuado por los artículos 2626 y 2627 del Códig-
 "o Civil que rigen el contrato base de la acción; por otra
 "parte, el apelante afirma que la Convención de Viena so--
 "bre Derecho de los Tratados, en su artículo sexto determi-
 "na que: "Cuando varíen fundamentalmente las circunstan-
 "cias que motivaron un Tratado Internacional, deberán modi-
 "ficarse las obligaciones futuras, para ajustarlas a las -
 "nuevas circunstancias..."; el anterior principio no es --
 "aplicable al caso controvertido, toda vez que se refiere-
 "a los tratados internacionales, en cambio, el contrato --
 "base de la acción no tiene el carácter de tratado interna-
 "cional, puesto que fue celebrado por nacionales, motivo -
 "por el cual debe regirse por el derecho interno, concreta-
 "mente, por el Código de Comercio y el Código Civil."

CUARTO.- Los conceptos de violación que expresa-
 la quejosa, son los siguientes:

"PRIMERO.- Violación de las disposiciones lega-
 "les en que la sentencia pretende fundarse y como conse-
 "cuencia, violación de las garantías consignadas en el ar-
 "tículo 14 y 16 de la Constitución General de la República."

"En mi primer agravio expresé lo siguiente: - - -

"PRIMER AGRAVIO: Violación de los artículos 2626, 2627, -
 "1882 y siguientes del Código Civil, supletorio del ordena-
 "miento mercantil y violación del artículo 78 del Código -



"de Comercio.- - - La sentencia se basa fundamentalmente-
"para negar la procedencia de la acción en que el artículo
"2626 del Código Civil establece que el contratista a pre-
"cio alzado no tendrá derecho a exigir aumento "aunque lo
"haya tenido el precio de los materiales o el de los jor-
"nales" y que el artículo 2627 del mismo ordenamiento ci-
"vil dice que se aplique el artículo anterior aún cuando-
"haya habido cambio en los planos o diseños, ^A no ser --
"que sean autorizados por escrito por el dueño con expre-
"sa designación del precio".- - - Ignora la sentencia que
"se adujo y comprobó que los aumentos ^C en los precios uni-
"tarios se debieron a la dilación de la demanda en la po-
"sibilidad de ejecución de las ^E obras, por lo que lo que -
"se reclamó fue una consecuencia no de la alteración pre-
"visible de los precios ^E de los materiales, sino a que la-
"alteración ^T de esos precios se debió a hechos imputables-
"a la demandada y que ^E constituyeron una violación del con-
"trato. Si la demandada, incumpliendo el contrato dilató
"la iniciación ^E de las obras y como consecuencia imprevis-
"ta, por la aceleración del proceso inflacionario, los --
"precios ^E se alteraron sustancialmente como está comproba-
"do, la demandada debe responder de una alteración de pre-
"cios ^S que por su culpa alteró el contrato. En nuestra de-
"manda enfocamos en la forma indicada nuestra pretensión-
"al aclarar en el Capítulo de Derecho que la pretensión -
"de la demandada de no pagar las diferencias por altera-
"ciones de precios, constituiría además, un enriquecimien-
"to ilícito.- - - Consecuentemente, resulta clara la inde-
"bida aplicación del artículo 2626 del Código Civil.- - -



A. D. 8681/84.

"Por lo que hace a la violación del artículo 2627 es evidente que esta disposición legal se refiere a cambios o aumentos en planos o diseños hechos por el empresario -- contratista, los cuales deberán ser autorizados por el -- dueño de la obra, y en el caso a debate el a quo, ignoró que las modificaciones a los planos y los diseños fueron hechos por el propietario de la obra y que el contratista, o sea la actora, únicamente aceptó tales variaciones; y como al proponerse y aceptarse no hubo convenio sobre el aumento de precios que las variaciones necesariamente tenían que producir, es claro que conforme a los más elementales principios de la buena fe, la parte que ordenó las variaciones tiene obligación de pagarlas y resulta -- inmoral e ilegal su pretensión de enriquecerse con la -- ejecución de obras que ordenó y no quiere pagar. -- Al no considerarlo así, además de violarse el artículo 2627 del Código Civil y el 78 del Código de Comercio, se ha -- violado también el artículo 1796 del Código Civil, que -- determina que los contratos obligarán a todas las consecuencias derivadas de la buena fe y la naturaleza de las circunstancias." -- La responsable desecha este agravio por lo siguiente: (la quejosa transcribe aquí las -- consideraciones hechas por el Tribunal responsable al estudiar el primer agravio). -- Estima la responsable -- que no está comprobado que la obra se retrasó por causas imputables a la demandada, y esto lo deduce del hecho de que no aparece ningún documento firmado por representante legal de ella. -- En el contrato se especificó que CONTEO, S. A., (Control Económico de Obras, S. A.) ins-

SECRET
SECRET



"peccionaría las obras y daría todas las instrucciones que
"estimara pertinentes con su ejecución. Y en el expedien-
"te consta que CONTEO, S. A. giró las instrucciones y en--
"tregó los planos para la obra fuera de los plazos estipu-
"lados. Esto ha sido implícitamente reconocido por la de-
"mandada y al no considerarlo así la responsable se susti-
"tuye a ella oponiendo en el fondo excepciones que la de-
"mandada no ha opuesto, con lo que se viola además el prin-
"cipio de congruencia, lo que ocasiona la consiguiente vio-
"lación que debe ser reparada. - - - Además, en la confesio-
"nal de los representantes de la demandada, quedó expresa-
"mente admitido que fue CONTEO, S. A. quien, por cuenta de
"la demandada, giró las instrucciones para la ejecución de
"la obra y la inspección. - - - Por otra parte, debe consi-
"derarse que está perfectamente comprobado que se realizó
"una obra adicional ordenada por CONTEO, S. A., según se -
"especificó en la demanda y fue reconocido en la confesio-
"nal por las mismas personas que suscribieron el contrato.
"No es cierto, como pretende la juzgadora, que sólo con do-
"cumentos firmados por la demandada pudo acreditarse la mo-
"dificación del contrato, ya que conforme al contrato mis-
"mo, la demandada autoriza a CONTEO, S. A., para vigilar y
"dar instrucciones, y está comprobado que las instrucciones
"se dieron y se realizaron obras nuevas con las cuales pre-
"tende la sentencia que se enriquezca la demandada. - - -
"Se adujo también por nuestra parte como prueba de nuestras
"pretensiones de ajuste de precios convenida con la deman-
"dada que se convino que parte de las obras nuevas las rea-
"lizara la Sociedad llamada [REDACTED] que la actora --



A. D. 8681/84.

"convino en ello y en que en el ajuste final se dedujeran-
"de sus pagos lo que correspondiera a las obras realizadas
"por [REDACTED], y que la demandada al pretender el ajus-
"te aplica los precios reales para deducirlo de lo que tie-
"ne que pagar a la actora, lo cual constituye, como expre-
"samos en nuestro agravio, una situación inequitativa y u-
"na prueba de que se convino la reconsideración de los pre-
"cios. Es curioso que aunque la responsable considere es-
"to probado, aduce que no fue materia de la litis, lo que-
"quiere decir que el juzgador ignoró que la actora no pre-
"tende que no se le pague lo justo a [REDACTED], sino --
"que a la actora se le aplique el mismo tratamiento, porque
"de lo contrario resultaría que la actora está pagando las
"obras encomendadas a [REDACTED] -- La responsable se-
"sale por la tangente al invocar la jurisprudencia en el -
"~~sentido de~~ que sólo deben resolverse los puntos sujetos a
"debate y, repetimos, lo que está en el debate es que no -
"se puede legalmente pagar un precio a la actora por la --
"obra realizada y deducirle un precio mayor por lo que ella
"convino que realizara un tercero dentro del total conveni-
"do en el contrato de obras. -- Resumiendo, se funda la
"sentencia en el pretendido hecho de que la intervención -
"de CONTEO, S. A., no obliga a la demandada lo que equiva-
"le a ignorar la cláusula 8a. del contrato en el que se au-
"toriza la intervención de CONTEO, S. A. y a ignorar tam-
"bién lo aceptado por la demandada en su confesional respec-
"to de que se ejecutaron obras no contratadas inicialmente
"y ordenadas por CONTEO, S. A."

SEGUNDO.- Violación del artículo 132 constitución



"nal, en relación con el artículo 78 del Código de Comercio y las disposiciones relacionadas del Código Civil su pletorio del ordenamiento mercantil. En nuestro quinto-
"agravio que damos aquí por repetido invocamos la aplicación de la cláusula "Rebus Sic Stantibus" que en el caso
"establecería un principio de equidad y justicia frente a
"la cláusula "Pacta Sunt Servanda" que pretende ignorar -
"la sentencia reclamada. Ya hemos indicado que aún consi-
"derando aplicable rigurosamente la cláusula "Pacta Sunt-
"Servanda", nuestras pretensiones están fundamentadas, ya
"que toda la obra se realizó conforme al contrato original
"y a las modificaciones convenidas. - - - Para desechar nues-
"tro quinto agravio, el juzgador expresamente dice: "El -
"quinto agravio del inconforme es infundado, toda vez que,
"por respetable que sean los conceptos doctrinarios de Ju-
"lián Bonnecase, Rafael Rojina Villegas y la jurisprudencia
"francesa citados por el apelante, de conformidad con
"lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política
"de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador está -
"obligado a dictar sus resoluciones con apoyo en lo dis-
"puesto en la Ley positiva de nuestro país." - - - Resulta
"ría increíble que la responsable, no sólo se sustituya -
"tan insistentemente a la demandada esgrimiendo razonamien-
"tos excepcionales que la demandada no imaginó, sino que -
"lleve su extremo a ignorar que la Constitución General -
"de la República es ley positiva de nuestro país y preten-
"de oponer a los mandatos constitucionales el texto de las
"leyes secundarias que invoca contrariando el texto expre-
"so de la Ley Suprema que dice que la Constitución, las -



A. D. 8681/84.

"leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión, y ordena terminantemente que: --

"los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados". -- Es inaudita la falta de respeto a la Ley Constitucional y más increíble nos parece si consideramos que la autoridad responsable es autoridad federal de amparo."

QUINTO.- En el presente caso el problema planteado se reduce sustancialmente a lo siguiente: La actora, ahora quejosa, demandó de la [REDACTED] el pago de la cantidad de [REDACTED] como saldo que resulta del ajuste final de los trabajos ejecutados por aquélla. Adujo que el precio, pactado en un contrato de obra a precio alzado, sufrió un incremento por el retraso en la iniciación de las obras, imputable a la demandada, así como por modificaciones reformas y adiciones a las mismas, que con posterioridad a la firma del contrato acordaron las partes. Tanto el Juez de Primera Instancia como el Tribunal responsable consideraron que la demandante no acreditó los elementos constitutivos de su acción. Ahora bien, dentro de los razonamientos formulados por esta última autoridad, se encuentran los siguientes:

SUPLENTE
VER



1.- Del documento fundatorio de la acción se desprende que se trata de un contrato a precio alzado, en el que se estableció que si en las estimaciones de obra realizadas se encontraran diferencias en las cantidades consignadas en el presupuesto, ambas partes aceptaban que no tendrían derecho a percibir las diferencias de precio que resultaran. Lo anteriormente pactado, encuadra a la perfección en lo dispuesto por los artículos 262 y 2627 del Código Civil Federal.

2.- En los documentos exhibidos por la actora no se especifica el precio adicional que se debería de pagar por las modificaciones a la obra contratada.

3.- No se acredita con exactitud el tiempo que se retrasó la obra, en virtud de que el programa de trabajo que la pretensora exhibió, se desestimó por no satisfacer los extremos precisados en el contrato original.

4.- No hay bases para determinar con precisión la variación de los precios, dado que es imposible establecer el tiempo que se retrasó la ejecución de la obra.

Los anteriores razonamientos del Tribunal a quo no se combaten destacadamente en los conceptos de violación que expresa la quejosa, a pesar de ser fundamentales para la solución del asunto, lo cual es una razón suficiente para negarle la protección que solicita, de acuerdo con lo establecido por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. DEBEN REFERIRSE A LA



A.D. 8681/84.

"TOTALIDAD DE LOS ARGUMENTOS LEGALES EN QUE SE APOYA LA-
"SENTENCIA RECLAMADA.- Si los conceptos de violación no-
"se refieren a la totalidad de los razonamientos legales
"en que se apoya la sentencia constitutiva del acto re-
"clamado, el amparo debe negarse por carecer la Suprema-
"Corte de facultades legales para decidir acerca de la -
"constitucionalidad o inconstitucionalidad de los argu-
"mentos no impugnados, puesto que, de hacerlo, equivaldría
"a que supliera una deficiencia de la queja, no autoriza-
"da por el artículo 76 de la Ley de Amparo." A. D. ---
5435/62. Manuel Palafox. Julio 4 de 1966. Unanimidad de
5 votos. Ponente: Mtro. José Castro Estrada. Sexta Epoca,
volumen CLIX, Cuarta Parte, página 45, del Semanario Judi-
cial de la Federación.

✓ SEXTO.- En virtud de que resultaría dudoso de-
sestimar de plano los conceptos de violación por inoperan-
tes, esta Tercera Sala considera conveniente hacer el es-
tudio de tales conceptos para demostrar que los mismos -
son infundados.

En el apartado que la quejosa denomina primer-
concepto de violación se contienen en realidad diversos
conceptos que se estudian conjuntamente, pues todos ellos
se relacionan con la supuesta prueba, por la actora, de-
los hechos que, según ella, justifican su derecho a co-
brar un precio mayor al estipulado originalmente en el -
contrato de obra a precio alzado, base de la acción.

Aduce la quejosa que la responsable estima
que no está comprobado que la obra se retrasó por causas

TERCERA




imputables a la demandada. Esto lo deduce el Tribunal - del hecho de que no aparece en el expediente ningún documento firmado por el representante legal de la enjuiciada. Argumenta la peticionaria que tal razonamiento es injustificado, pues en el contrato de obra se especificó que Conteo, S.A. inspeccionaría los trabajos y daría instrucciones a la contratista, constando en autos que tal empresa giró dichas instrucciones entregando a la actora extemporáneamente los planos. Esto fue reconocido implícitamente por la demandada y, a pesar de ello, la responsable se sustituye a ella oponiendo excepciones que no hizo valer. Además, en la confesional a cargo de los representantes de la enjuiciada, se admitió que Conteo, S.A., por cuenta de la [REDACTED] giró las instrucciones.

El anterior argumento carece de justificación por lo siguiente. En primer término, conviene precisar el alcance de los artículos 2626 y 2627 del Código Civil para el D.F., ubicados en el capítulo correspondiente al "contrato de obra a precio alzado", preceptos en que la responsable apoya su fallo y que son aplicables supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con el artículo 2o. de este último Ordenamiento. El primero de éstos dice: "El empresario que se encargue de ejecutar - alguna obra por precio determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los jornales."; y el segundo preceptúa: "Lo dispuesto en el artículo anterior



"se observará también cuando haya habido algún cambio o aumento en el plano o diseño, a no ser que sean autorizados por escrito por el dueño y con expresa designación del precio."

El examen de estos artículos nos demuestra -- que contienen a la vez una regla y una excepción. Según la regla, en las obras por precio determinado, no puede el contratista pedir el aumento de éste, ni siquiera en el caso de que lo hayan tenido los materiales o los jornales. Según la excepción, el contratista puede pretender el aumento del precio si ha habido algún cambio en el plano, pero a condición de que concurren las dos circunstancias siguientes: 1) que el cambio o aumento en el plano hayan sido autorizados por escrito por el dueño; -- 2) que se haya designado expresamente el precio. La ~~razón~~ razón legislativa de la regla antes mencionada es la siguiente: Por una parte, tiene por objeto evitar los abusos a que su ausencia pudiera dar lugar, pues sin ella bastaría que el contratista hiciera ligeras modificaciones para que pudiera pretender el aumento del precio en cantidades desproporcionadas; y por otra parte, se funda en la equidad y en la justicia que demandan que haya igualdad entre los contratantes, pues así como el propietario no tiene derecho para exigir la disminución del precio cuando los gastos del contratista hayan sido menores a los previstos, de la misma manera, tampoco el empresario tiene derecho a exigir mayor precio por el aumento en el costo de los jornales o de los materiales.





Esta regla es inalterable, según se desprende de los dispositivos en cuestión, salvo el mencionado caso de excepción, que como tal, sólo debe aplicarse restrictivamente y dentro de los límites precisos del precepto que lo establece.

Lo anterior significa que la acción ejercitada en la especie por el contratista no puede prosperar, pues las razones que aduce para pretender el aumento en el precio no encajan en el referido supuesto de excepción legalmente consignado. En la hipótesis inadmitida de que se hubiera convenido que el dueño diera al contratista el aviso de iniciación de obra, dentro de un lapso determinado y que aquél lo hubiere dado extemporáneamente, la actora, al recibir tal aviso, pudo pedir la resolución del contrato, exigiendo además el pago de los daños y perjuicios que se le hubieren causado; esto con apoyo en el artículo 1949 del Código Civil del D.F. que dice: "La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.- El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible." Por tanto, si la demandante no reclamó la rescisión del contrato, al recibir el aviso de iniciación de la obra, debe entenderse que estuvo de acuerdo en realizar los tra-



A.D. 8681/84.

bajos por el precio estipulado en el contrato.

Además, como lo sostiene la responsable, ni siquiera se encuentra acreditado que la obra se haya iniciado extemporáneamente por causas imputables a la demandada. En efecto, en el contrato base de la acción no se especificó ninguna fecha de iniciación, pues en su cláusula tercera sólo se dice: "El contratista se obliga a --
"iniciar las obras objeto de este contrato dentro del --
"plazo que se le señale en la orden de trabajo o aviso --
"de iniciación que le gire la propietaria. -- -- El con--
"tratista se obliga a concluir totalmente las obras den--
"tro de un término de siete meses y medio, en forma ----
"coordinada con el programa general de la obra y conta--
"dos a partir de la fecha señalada para la iniciación de
"los trabajos"; y en el párrafo primero de la cláusula --
siguiente se dice: "Las obras deberán ser ejecutadas de-
"acuerdo con el programa de trabajo que firmado por las-
"partes se anexa al presente contrato y forma parte inte-
"grante del mismo.". Cabe señalar con relación a este --
"punto, que la actora en el hecho cuarto de su demanda --
"manifestó: "De conformidad con la cláusula quinta del-
"contrato, las obras se ejecutarían de acuerdo con el --
"programa de trabajo cuyo original se acompaña y en el --
"que señaló como fecha de iniciación de las obras el ----
"dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y siete".
Al respecto, la responsable en su fallo sostiene: "El --
"programa de trabajo que la pretensora exhibió se deses-
"timó porque no satisface los extremos precisados en el





"contrato original, en donde se estableció que dicho programa estaba firmado por ambos contratantes, en cambio, el presentado por la demandante tiene una firma ilegible que no corresponde a ninguno de los que intervinieron en el acuerdo de voluntades base de la acción". Este razonamiento, según se vio antes, no se combatió en los conceptos de violación por lo que debe quedar intocado.

También aduce la quejosa que está perfectamente probado que se realizó una obra adicional ordenada por Conteo, S.A., hecho que se especificó en la demanda y fue reconocido en la confesional a cargo de los representantes legales de la enjuiciada. Este razonamiento de la peticionaria carece de justificación, pues, por una parte, la actora no precisó en su demanda original en qué consistieron las modificaciones y adiciones a la obra, por lo que las pruebas rendidas para acreditar tal extremo resultan inconducentes; y por otro lado, si las partes convinieron en la realización de nuevos trabajos, tal acuerdo de voluntades debió de hacerse constar por escrito, en los términos del artículo 2627 del Código Civil para el Distrito Federal, antes transcrito. Cabe señalar que, de acuerdo con la ley, el contrato de obra a precio alzado es de naturaleza formal, pues en los términos del artículo 2618 del citado ordenamiento, debe constar por escrito cuando se trate de una obra en cosa inmueble cuyo valor exceda de cien pesos, por lo que si se celebra un convenio que modifique a un contrato de es

A.D. 8681/84,

te tipo, es inconcuso que aquél; para poderse perfeccionar, también debe hacerse constar por escrito. Para corroborar este aserto, se transcribe enseguida el citado precepto: " Art. 2618.- Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado de la obra en cosa inmueble -- "cuyo valor sea de más de cien pesos se otorgará el contrato por escrito, incluyéndose en él una descripción -- "pormenorizada, y en los casos que lo requieran, un plano, "diseño o presupuesto de la obra." Consecuentemente, si el contratista pretendía que se le pagara un precio mayor por las modificaciones y adiciones hechas en la obra, debió exhibir el documento que acreditara el acuerdo de voluntades en tal sentido y, al no hacerlo, su acción no podía declararse probada. Debe también puntualizarse que -- de acuerdo con los artículos 78 y 79 del Código de Comercio, un contrato mercantil que requiera de una determinada forma para su eficacia, si no la satisface, no puede fundamentar una acción judicial. Estos preceptos dicen: -- "Art. 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se -- "obliga en la manera y términos que aparezca que quiso -- "obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa -- "de la observancia de formalidades o requisitos determinados; Art. 79.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede: I.- Los contratos que con arreglo a -- "este Código u otras leyes deban reducirse a escritura o -- "requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia; II.- Los contratos celebrados en país extranjero en -- "que la ley exige escrituras, formas o solemnidades deter





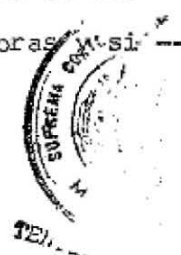
"minadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana.- En uno y otro caso, los contratos que no llenen las circunstancias respectivamente requeridas, no producirán obligación ni acción en juicio."

Con respecto a las cuestiones antes mencionadas, es conveniente transcribir la tesis de la Sala Auxiliar de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, - que esta Tercera Sala hace suya, la misma, aunque relativa a los contratos civiles, también es aplicable en materia mercantil dado el texto de los artículos del Código de Comercio antes copiados (además que en la especie el contrato de obra a precio alzado de que se trata, se rige por el Código Civil del D.F., aplicado supletoriamente al de Comercio). De dicha tesis se desprende que no puede exigirse el cumplimiento de un contrato, si previamente no se satisface el requisito formal que la ley establece para su perfeccionamiento; aparece publicada en la página 202 del Informe de Labores correspondiente a 1970, en su tercera parte y dice: "CONTRATOS. OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADAS DE LOS.- De conformidad con los artículos 1693 y 1730 del Código Civil del Estado de Chihuahua, correspondientes a los artículos 1796 y 1833 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, los contratos que, conforme a la ley, deban revestir una forma determinada, no se perfeccionarán hasta que no llenen tal requisito, esto es, no producirán sus efectos legales mientras no revistan la formalidad requerida. De consiguiente, cuando la ley establezca que un-

A.D. 8681/84.

"contrato debe constar en escritura pública, es necesaria que se cumpla con este requisito antes de que alguna de las partes que hubiesen intervenido en su celebración exija a la otra el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato correspondiente.- Amparo directo 9439/66.- Jacobo J. Zárrzar Zabag.- 10 de marzo de 1970.- 5 votos.- Ponente: Salvador Mondragón Guerra."

También aduce la quejosa que no es cierto que sólo con documentos firmados por la demandada podía acreditarse la modificación del contrato, ya que en éste la propia enjuiciada autorizó a Conteo, S.A. para vigilar las obras y dar instrucciones a la contratista. Este razonamiento de la quejosa también carece de justificación. Al respecto, es conveniente transcribir la cláusula octava del contrato base de la acción, en la que se establece la intervención que en los trabajos tendría la empresa Control Económico de Obras, S.A. (Conteo, S.A.); dice: - "La propietaria a través de Control Económico de Obras, S.A. inspeccionará en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dará al contratista por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste el proyecto...". Como se ve, de la cláusula transcrita no se desprende que Conteo, S.A. pudiera convenir con la contratista sobre modificaciones o adiciones en la obra, ni mucho menos, que pudiera acordar con ésta cambios en el precio inicialmente estipulado, pues de la cláusula sólo se desprende que Conteo, S.A. inspeccionaría las obras si





bien se facultó a esta empresa para dar a la contratista instrucciones por escrito, relacionadas con la ejecución de los trabajos, estas instrucciones sólo podían darse con la finalidad de que la misma se ajustara al proyecto. Así pues, debe insistirse que para la procedencia de la acción, la actora debió exhibir un documento que demostrara que precisamente las partes contratantes modificaron el contrato original. No deja de advertir esta Tercera Sala que los documentos exhibidos por la actora para acreditar tal extremo, sólo demuestran que Conteo, S.A. se dirigió a diversos funcionarios de la empresa demandante, comunicándole distintas cuestiones relacionadas con la obra, sin que de estos documentos pueda desprenderse que aquélla le propuso modificar los términos del contrato original, ni mucho menos, modificar el precio inicialmente pactado, ni tampoco el que Conteo, S.A. se hubiere comprometido a realizar un "ajuste final" para compensar a la contratista por la alteración sufrida en el precio de los materiales. Cabe señalar que, según se desprende de la demanda original, el hecho relativo a la existencia de un acuerdo para efectuar un ajuste final es la causa por la que la demandante reclamó la cantidad de que se trata, por lo que su falta de demostración, sería motivo suficiente para considerar que la misma no acreditó su acción.

También aduce la quejosa que en el juicio natural manifestó que como prueba de su reclamación de ajuste de precios, se dio la circunstancia de que la de-

A.D. 8681/84.

mandada pretende deducir de lo que tiene que pagar a la-
actora los precios reales (mayores a los inicialmente pag-
tados) para cubrir las obras realizadas por la sociedad-
llamada [REDACTED], e inequitativamente pretende cubrir
a la demandante, por las obras realizadas por ésta, los-
precios originalmente convenidos. Alega la promovente que
la responsable indebidamente considera que dicha cuestión
no fue materia de la litis.

El anterior argumento de la quejosa también es
injustificado, pues si bien la actora en el hecho décimo
cuarto de su demanda manifestó que se acordó encomendar-
a otro contratista la realización de una parte de las --
obras que inicialmente se le encargaron a ella y que la-
demandada pretendía rebajar, por tal concepto, del pago-
a la actora, una cantidad mayor a la presupuestada en el
~~contrato original~~, el Tribunal ad quem tiene razón al --
sostener que dentro de las prestaciones reclamadas no se
contiene ninguna relacionada con la remuneración que de-
be cubrirse al susodicho segundo contratista, por lo que
el juzgador no podía formular ningún pronunciamiento al-
respecto, además de que para ello hubiera sido necesario
llamar al mismo a juicio. Por otra parte, aun suponien-
do probado tal hecho, el mismo no sería apto para accredi-
tar el acuerdo en la variación del precio, pues ya se di-
jo que éste debió hacerse constar en un convenio escrito
modificadorio del contrato original.

Cabe finalmente agregar que es inexacto que --
la responsable de motuo proprio invocara excepciones no-





opuestas por la demandada, pues las consideraciones por ella formuladas se refieren al análisis de los elementos de la acción que deben ser acreditados por el actor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1194 del Código de Comercio, (este precepto dice: "El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción, y el reo sus excepciones."). En efecto, para que una acción por la que se reclama el pago de una suma por concepto de aumento en el precio originalmente pactado en un contrato de obra a precio alzado pueda prosperar, es indispensable demostrar que se dan los supuestos en los que, conforme a la ley, es posible exigir tal aumento, de acuerdo con lo antes expuesto. Para corroborar este razonamiento, es conveniente transcribir la tesis de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21 del volumen XVIII, Cuarta Parte, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación. Esta tesis, aunque relativa al artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, también es aplicable en materia mercantil, dado los términos del precepto del Código de Comercio últimamente transcrito; dice: "ACCION, PRUEBA DE LA.- Teniendo el actor la obligación de probar los hechos constitutivos de su acción, conforme lo dispone el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, es obvio que la falta de comprobación de alguno de ellos trae como consecuencia la absolución del demandado, porque siendo de orden público el cumplimiento de

A.D. 8681/84.

"las condiciones requeridas por la ley para la proceden-
"cia de la acción; su improcedencia, por falta de uno de
"sus requisitos esenciales, debe ser estimada por el juz
"gador.- A.D. 4398/69.- Gregorio Rodríguez Pablo.- 10 de
"junio de 1970.- 5 votos.- Ponente: Mariano Ramírez Váz-
"quez."

SEPTIMO.- El segundo concepto de violación,--
además de ser inoperante por las razones expuestas en el
considerando quinto de esta ejecutoria es infundado, se-
gún se demuestra enseguida. En primer lugar, cabe seña-
lar que en el caso la actora no invocó en su demanda ori-
ginal la aplicación de la llamada cláusula "rebus sic --
stantibus" (según la cual se reputa que las partes subor-
dinaron implícitamente el mantenimiento de sus obligacio-
nes contractuales, a la persistencia de las condiciones-
~~de hecho~~ existentes en el día del contrato). En efecto,
en el hecho décimo tercero de su demanda la actora mani-
festó que "en pláticas sostenidas entre representantes de
"mi mandante y de la demandada, al advertirse que la dila-
"ción en la ejecución de los trabajos imputables a esta
"última y las modificaciones solicitadas por la demanda--
"da influirían sobre la determinación de los precios uni-
"tarios, se acordó que, tomando en consideración los anti-
"cipos recibidos, mi mandante accediera, por razones prác-
"ticas, a presentar las primeras estimaciones, conforme a
"la cotización inicial, a reserva de realizar un ajuste -
"final que incluyera los incrementos por adicionales de
"vas obras y alteración de los precios unitarios debido-





"al conocido proceso inflacionario que padecemos". Como se ve, la actora reclamó el pago de una cantidad adicional, por concepto de aumento en el precio de la obra, - con base en la existencia de un supuesto acuerdo entre ella y la enjuiciada, lo que significa que en el juicio natural no demandó la aplicación de la cláusula "rebus sic stantibus", sino el cumplimiento de un ~~acto~~ ^{acto} posterior celebrado por las partes.

Además, la cláusula en cuestión de cualquier forma, no podría aplicarse al contrato de obras a precio alzado, que en el presente caso se encuentra regido por el Código Civil del D.F., pues este Ordenamiento adoptó el sistema rígido de los contratos, acorde con el principio ~~relativo~~ a los efectos de la declaración de voluntad, según se desprende de su artículo 1796, que dice: "Los - "contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, - "excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionen, obligan a -- "los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe al uso o "a la ley"; sin que por otra parte, el legislador haya recogido ningún precepto con base en el que pudiera aplicarse la teoría de la imprevisión (como, por ejemplo el artículo 1162 del Código Napoleón que establecía la interpretación del contrato en favor del deudor).

Para corroborar los anteriores razonamientos, es conveniente transcribir la tesis de esta Tercera Sala

A.D. 8681/84.

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31 del Informe de Labores correspondiente a -- 1980; dice: "CONTRATOS, INAPLICABILIDAD DE LA TEORIA DE-
"LA IMPREVISION EN LOS.- El artículo 1625 del Código Ci-
"vil del Estado de México, igual al 1796 del Código Civil
"del Distrito Federal, supletoriamente aplicado, siguen
"do el sistema rígido de los contratos, acorde con el --
"principio relativo a los efectos de la declaración de -
"voluntad, dispone que aquéllos obligan a las partes al-
"exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente --
"pactadas, y además, a las consecuencias que de los mis-
"mos se deriven, según su naturaleza, conforme a la bue-
"na fe, al uso o a la ley; precepto que, en esas condi--
"ciones, no deja lugar a su interpretación a fin de apli-
"car la teoría de la imprevisión en razón de esa buena -
"fe, que obviamente constituye un principio general de -
"derecho, pues precisamente, con base en ella, el obliga-
"do debe conducirse como persona consciente de su respon-
"sabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones,
"cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, --
"aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previe-
"ron o no pudieron preverse y que la modifiquen", como -
"lo estima don Trinidad García en su "Teoría de la Impre-
"visión en los contratos bajo el régimen de Derecho Ci-
"vil y del Common Law" citado por el licenciado Jorge --
"Reyes Tayabas en la obra invocada por el apoderado --
"La quejosa, página 181, máxime si se toma en cuenta que
"de acuerdo con lo estatuido en el artículo 38 del Cód-



"go de Comercio, las ventas de naturaleza mercantil, como
"el de la especie, no se rescinden aun por causa de le---
"sión, sin que ello impida, por otra parte, que de exis---
"tir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la
"economía de un determinado grupo social, no apreciado --
"por las partes, se modifiquen las condiciones de los con
"tratos relativos, mediante disposiciones de carácter ge-
"neral.- Amparo directo 1947/80.- Hidrogenadora Nacional,
"S.A. 15 de octubre de 1980.- 5 votos. Ponente: J. Ramón-
"Palacios Vargas."

Por otra parte, el hecho de que el Tribunal --
ad quem haya sostenido la inaplicabilidad de la cláusula-
"rebus sic stantibus", no importa una violación al artícu-
lo 133 de la Constitución general (que establece que: ---
"Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión --
"que emanen de ella y todos los tratados que estén de ---
"acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por --
"el Presidente de la República, con la aprobación del Se-
"nado, serán la Ley Suprema de toda la Unión..."), pues no
existe ningún precepto constitucional, ni ninguna ley ema-
nada del Congreso de la Unión, ni ningún tratado interna-
cional que imponga la aplicación de tal cláusula a los --
contratos regidos por el derecho común nacional.

Así pues, habiéndose demostrado que los con---
ceptos de violación expuestos por la quejosa son inoperan-
tes e infundados, procede negar a ésta la protección que-
solicitó.

Por lo expuesto y con fundamento en los artícu

A.D. 8681/84

los 103, fracción I, 107, fracciones I, II, III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución General y 76 a 79, 158, 159 y 185 a 191 de la Ley de Amparo, se resuelve:

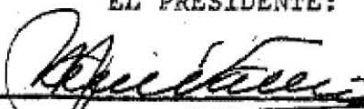
UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni -- protege a Productos de Concreto Tolteca, S.A., contra el acto que reclama del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, consistente en la sentencia definitiva de siete de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, dictada en la segunda instancia del juicio ordinario mercantil que promovió la quejosa en contra de [REDACTED]

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable; en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Mariano Azuela Guitrón, Jorge Olivera Toro, Ernesto Díaz Infante y J. Ramón Palacios Vargas. Fue Ponente el C. Ministro Mariano Azuela Guitrón. El proyecto se aprobó con la modificación secundaria, hecha por el propio Ministro Ponente. Por unanimidad de cuatro votos se acordó la publicación de la ejecutoria, a partir de su considerando sexto, así como las tesis relativas.

Firman el C. Presidente, el Ministro Ponente y la Secretaria de Acuerdos de la Sala, que autoriza y da fe.

EL PRESIDENTE:



MRE. J. RAMON PALACIOS VARGAS.





A.D. 8681/84

EL MINISTRO PONENTE:

MTRO. MARIANO AZUELA GUITRON.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

LIC. RAQUEL FLORES MUNGUIA.

SENTEN
Esta hoja corresponde al amparo directo número 8681/84
promovido por Productos de Concreto Tolteca, S. A.

"En 12 MAR. 1985 por lista
de la misma fecha se notificó la resolución anterior a
los interesados y al Ministerio Público Federal,



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS